

C.A. de Santiago

Santiago, veintinueve de abril de dos mil veinticinco.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece Pedro Romo Rojas, en representación de la Fundación Educacional Atlántico, en su calidad de sostenedora del Colegio San Pedro de Quilicura, interponiendo recurso de protección en contra de ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A., por haber incurrido en cobros improcedentes y excesivos por concepto de demanda máxima y consumo reactivo, así como por errores en facturación de consumos eléctricos, actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que contraviene normas expresas del Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos, vulnerando con ello el derecho fundamental de propiedad contemplado en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita se deje sin efecto las facturaciones indicadas y se ordene una nueva facturación ajustada a la ley.

Señala que su representada es sostenedora del Colegio San Pedro de Quilicura, que tiene matriculados a más de 1.500 niños, y recibe mensualmente una subvención estatal de aproximadamente \$70.000.000, con la cual debe solventar todos los costos de mantención del establecimiento educacional, incluyendo sueldos, cotizaciones de trabajadores y gastos como el consumo eléctrico. Dicha subvención se entrega conforme a lo dispuesto en el DFL N°2 de Educación de 1998, y según la normativa, solo puede destinarse a fines educacionales.

Expone que el recurso tiene su origen en dos hechos indubitados. El primero se relaciona con cobros por demanda máxima y consumo reactivo que la recurrida continúa facturando hasta la fecha, montos que considera absolutamente desproporcionados e improcedentes, atendida la actividad que se desarrolla en el colegio. Explica que el cobro por demanda máxima corresponde al valor más alto de las demandas integradas en períodos sucesivos de 15 minutos, mientras que la energía reactiva es aquella que no es útil,



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: ECZXUGEMXF

pero sí necesaria para que algunos aparatos funcionen, como motores de maquinaria, transformadores y bombas.

Indica que el 7 de junio de 2023, la recurrida emitió varias facturas con cobros por concepto de demanda máxima por un total de \$40.686.438. Señala que desde mayo de 2021 a enero de 2022, es decir, por 9 meses, se cobró por este concepto la suma de \$26.562.745, seguido de cobros adicionales en facturas posteriores: de enero a febrero de 2022 por \$3.320.343, de febrero a marzo de 2022 por \$3.320.343, de marzo a abril de 2022 por \$3.320.696, y finalmente en la factura de mayo a octubre de 2022, la suma de \$841.614.

Manifiesta que el reclamo por estos cobros fue objeto de un recurso de protección anterior, y que mientras se tramitaba dicho recurso, en diciembre de 2023, ENEL reconoció expresamente haber cometido un error en los cobros por demanda máxima y consumo reactivo, ordenando descontar la suma de \$64.022.804, incluyendo intereses y reajustes hasta esa fecha. Sin embargo, sostiene que en las facturas emitidas desde enero de 2024 hasta la actualidad, ENEL ha continuado cobrando por concepto de demanda máxima y consumo reactivo, montos que no corresponden, dado que en el inmueble funciona un colegio que no posee maquinarias, ascensores, bombas u otros equipos que consuman o demanden grandes cantidades de electricidad como una fábrica o empresa.

El segundo hecho se refiere a que hasta la fecha, la recurrida no ha corregido las arbitrariedades cometidas en la facturación de 13 facturas emitidas en junio de 2023, correspondientes al consumo de mayo de 2021 a enero de 2023. Señala que por sentencia de 4 de enero de 2024, en causa rol 11.429-2023 ante la Corte de Apelaciones de Santiago, se ordenó a ENEL realizar una auditoría para la correcta determinación de los montos a facturar por los períodos objeto del presente recurso, ya que eran evidentemente arbitrarios.

Indica que el consumo eléctrico promedio del colegio es de aproximadamente \$1.000.000 mensuales, el cual se ha pagado siempre de manera mensual. En relación a las 13 facturas emitidas



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: ECZXUGEMXF

en junio de 2023, que cobran consumos desde mayo de 2021 a enero de 2023, señala que algunas contienen lecturas y otras no. Al solicitar explicación sobre los conceptos cobrados, le indicaron que al tener una empresa, los motores generaron un cobro reactivo, a lo que aclaró que se trata de un colegio que no tiene motores.

Señala diversos errores o anomalías en la facturación que ENEL no ha corregido. En primer lugar, cuando se facturó sin lectura, observa duplicidad en los cobros. Por ejemplo, en cuatro facturas (28082484, 28082579, 28082642 y 28082886) se cobra repetidamente el consumo desde el 11 de mayo de 2022, sin rebajar en cada factura el consumo ya cobrado en la anterior, lo que resulta en una cuadruplicación del cobro por el mismo período. Similar situación ocurre con otras facturas (28134320, 28135917 y 28145183) donde se cobra octubre de 2022 en las tres facturas.

Respecto a la omisión de lectura y facturación de los servicios desde mayo de 2021 a enero de 2023, califica esta actuación como ilegal y arbitraria. Cita el artículo 128 del Decreto N°327 que fija el Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos, que establece la obligación de los concesionarios de entregar la factura o boleta de los consumos en la dirección del inmueble donde se registró el consumo. También menciona el artículo 5-7 N°2 de la Norma Técnica de Calidad de Servicios para Sistemas de Distribución, que dispone que la empresa distribuidora debe entregar la totalidad de las facturas en un plazo cuyo término debe ser como máximo anterior en 10 días hábiles a la fecha de vencimiento.

Argumenta que ENEL ha vulnerado todas estas normas, ya que no facturó mensual o bimestralmente, sino que en junio de 2023 emitió 13 facturas por cobros de consumo entre mayo de 2021 y enero de 2023, sin haber cumplido con su obligación de entregar dichas facturas, y pretendiendo que se pagara antes del 4 de julio de 2023 un total de \$74.601.202. Considera que este actuar vulnera lo dispuesto en el artículo 129 del Reglamento, que establece que si por cualquier causa no imputable al concesionario no pudiere efectuarse la lectura, podrá facturar provisoriamente hasta por dos períodos



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: ECZXUGEMXF

consecutivos una cantidad equivalente al promedio facturado en los seis meses anteriores.

Sostiene que las 13 facturas contienen el consumo de 20 meses o períodos consecutivos, y lo facturado no corresponde al promedio de lo facturado en los seis meses anteriores. Señala que el cobro inmediatamente anterior fue por 9 meses, y con lectura de medidor se cobró un total de \$4.640.399, lo que da un promedio mensual de \$773.399. Al multiplicar este promedio por los 20 meses reclamados, el monto debería ser \$15.467.980, una suma muy inferior a los \$74.611.552 cobrados en junio de 2023.

Afirma que hasta la fecha dichos errores no se han corregido y se generan mensualmente intereses por mora de aproximadamente \$800.000, que se suman al monto facturado en ese período que contiene evidentes errores y que ENEL se niega a corregir. Asevera que la recurrida ha continuado incurriendo en un acto ilegal y arbitrario de forma continua, arrastrándose un saldo de deuda que no corresponde, sumado a intereses y reajustes que mensualmente cobra ENEL por esta supuesta deuda.

Indica que posterior a la sentencia del recurso de protección que ordenó a ENEL realizar una auditoría, la empresa no ha revisado los aspectos descritos y denunciados, solo descontó el cobro por demanda máxima. Señala que se han realizado tres reclamos ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), todos acogidos, donde la empresa se comprometió a revisar la facturación, pero hasta la fecha no lo ha cumplido, devengándose intereses y reajustes considerables. La última respuesta recibida fue una carta del 12 de septiembre donde la empresa se comprometió a entregar una respuesta, la cual no ha llegado, mientras siguen cobrando un saldo de deuda e intereses que ascienden a \$67.902.913.

En cuanto a los fundamentos de derecho, sostiene que concurren todos los presupuestos procesales para que proceda la acción de protección. Identifica como acción ilegal y arbitraria el hecho de que ENEL no haya corregido las irregularidades en las 13 facturas emitidas en junio de 2023, constituyendo una violación flagrante de lo dispuesto en los artículos 129 y 126 del Reglamento



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: ECZXUGEMXF

de la Ley General de Servicios Eléctricos. Considera que, como consecuencia de esta acción, se deriva la privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio del derecho de propiedad sobre el cobro de \$67.902.913, suma que no se ha cobrado conforme a la ley. Afirma que el consumo eléctrico del colegio debe pagarse con cargo a la subvención escolar, y de cobrarse ese monto, la representada no podría pagar los sueldos y demás gastos del establecimiento educacional.

Señala que el actuar de ENEL lesiona el derecho de propiedad de su representada, contemplado en el artículo 19 N°24 de la Constitución, que se encuentra bajo la tutela de la acción constitucional. Explica que la subvención escolar se utiliza para pagar sueldos, cotizaciones y gastos educativos, y que estos fondos, al ser transferidos a la Fundación, se incorporaron a su patrimonio y sobre ellos se ejerce un legítimo derecho de dominio, el cual se ve amenazado por el cobro improcedente.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se deje sin efecto las facturaciones indicadas, ordenando una nueva facturación ajustada a la ley, con expresa condena en costas.

SEGUNDO: Que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, evacuando informe, indica que, conforme al artículo 3° N°17 de la Ley N°18.410, corresponde a dicha entidad resolver las controversias entre los clientes eléctricos regulados y las concesionarias del servicio público de distribución eléctrica, en las materias tratadas por la regulación eléctrica.

Señala que en relación a los cargos por demanda máxima de potencia suministrada y por consumo reactivo que son objeto de controversia en el presente recurso, resulta pertinente indicar que el Decreto 11T/2016 del Ministerio de Energía establece que, para la opción tarifaria BT4.3 aplicable en la especie, la demanda máxima por potencia suministrada se determina del promedio de las dos más altas demandas leídas de los últimos doce meses. Por otra parte, el mismo decreto habilita aplicar un cargo a modo de sanción al usuario que presenta un factor de potencia fuera del umbral de 0,93, de



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: ECZXUGEMXF

acuerdo a la relación entre la potencia activa consumida y la potencia reactiva inductiva registrada en el equipo de medida.

Informa que, efectivamente, como lo plantea el recurrente en su acción de protección, éste presentó reclamo en cuatro oportunidades ante dicha institución, con fechas 09.02.2024, 11.04.2024, 04.07.2024 y 20.08.2024. Sin embargo, tales reclamos fueron indebidamente catalogados como reclamos sin previa interacción con la distribuidora, derivándose para su tratamiento directamente por la concesionaria, sin intervención del organismo fiscalizador.

Expresa además la Superintendencia que, observando el caso concreto, efectivamente no concurre un estándar exigible a una concesionaria de servicio público que requiere el pago de deudas por servicios básicos, toda vez que en el período reclamado no se observa una emisión consistente de facturaciones mensuales, con identificación de consumos mensuales de energía y potencia registrados y leídos en el sistema de medida, especialmente para efectos de demanda máxima por potencia suministrada y consumos reactivos. Esta circunstancia, a juicio del organismo fiscalizador, impide exigir el pago por servicio eléctrico y, eventualmente, intereses por mora.

Finalmente, el órgano señala que, más allá de lo que resuelva a modo cautelar esta Corte de Apelaciones, agotada la acción constitucional, el usuario podrá ejercer su acción a plantear reclamo en sede administrativa ante la Superintendencia, para efectos de resolverse la controversia con la concesionaria. Dicho proceso administrativo impedirá que el usuario se vea afectado con interrupción de suministro eléctrico por deuda sometida a disputa. Posteriormente, los interesados podrán reclamar de ilegalidad contra el acto administrativo que adjudica derechos, ante esta Corte de Apelaciones, para efectos de someter a control jurisdiccional la actividad administrativa.

TERCERO: Que, el abogado Cristian Andrés Muñoz Levill, en representación de la recurrida ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A., evacúa informe al tenor del recurso de protección, solicitando su



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: ECZXUGEMXF

rechazo, en base a los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:

Señala la recurrida que el cliente efectuó un reclamo ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) el 14 de septiembre de 2023, caso 1920151, exponiendo que "en junio 2023 se emiten 13 facturas desde mayo 2021 a enero 2023, con lectura y sin lectura por \$74.611.552. Se cobra en 4 facturas del 7 junio 2023, por demanda máxima \$26.562.745 de mayo 2021 a enero de 2022, enero \$3.320.343 de febrero a marzo 2022 \$3.320.343". Indica que dicho reclamo fue resuelto mediante Oficio Ordinario N°193661, de fecha 6 de octubre de 2023, como "No Ha Lugar" para el cliente, informándole que, "de acuerdo con lo establecido en la Normativa Vigente, son las propias empresas las que deben entregar en primera instancia una respuesta sus usuarios. Adicionalmente hemos constatado que la empresa eléctrica se encuentra dentro del plazo, de 30 días, para responder directamente a usted su requerimiento".

Añade que, posteriormente, el 25 de junio de 2024, se interpuso un segundo reclamo ante la SEC con caso 2068770, indicando que ENEL "se niega a cumplir sentencia del 5 de enero de 2024, que acogió recurso de protección por arbitrariedad de los montos cobrados y ordena realizar auditoría a los cobros reclamados desde mayo 2022. Solo por un reclamo anterior". Expone que, con fecha 7 de agosto de 2024, tras realizarse el estudio comercial requerido al cliente, ENEL rebajó de su facturación la suma de \$11.581.806 por concepto de intereses indebidos en su suministro. En cuanto al análisis de lectura de consumos, señala que pudo comprobarse que éstos se encontraban normales y sin anomalías, según consta en el reporte adjunto.

Destaca, como elemento relevante, que el cliente no registra pagos en su cuenta de suministro eléctrico desde el 1 de junio de 2022, acumulando una deuda impaga por más de dos años y siete meses, obligación que estima vigente independientemente de la existencia o no de problemas en la facturación.

Asimismo, explica que el cliente cuenta con una tarifa contratada BT-4.3, conforme a la cual no existe únicamente cobro por



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: ECZXUGEMXF

consumos efectivos de energía eléctrica, sino que también se generan cargos independientes de dicho consumo. Detalla que la tarifa está compuesta por los siguientes cargos: i) Cargo Fijo Mensual, que se factura todos los meses del año, independiente del consumo del cliente; ii) Cargo Fijo por Arriendo de Equipos, que se factura todos los meses a los clientes que optaron por arrendar a la compañía el equipo de medida; iii) Cargo por Energía, que se obtiene multiplicando la energía mensual consumida (kWh) por el precio unitario de la energía (\$/kWh); y iv) Cargo por Potencia, que depende de la alternativa elegida (BT4.2 o BT4.3).

En cuanto a los fundamentos de derecho, sostiene que ENEL Distribución Chile S.A. no ha cometido ningún acto ni incurrido en ninguna omisión arbitraria o ilegal que pudiera causar una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías que el artículo 19 de la Constitución Política de la República asegura a la recurrente o, en su defecto, éstas fueron debidamente subsanadas. En consecuencia, afirma que no concurren en la especie los requisitos que la Carta Fundamental establece en el artículo 20 para que pueda prosperar la acción cautelar de protección de las garantías constitucionales y, por ende, el recurso intentado debería ser rechazado.

Argumenta además que la infracción recurrible por el recurso de protección debe ser patente, manifiesta, grave y antijurídica, porque el objetivo propio y restringido de este recurso es reaccionar contra una situación de hecho, evidentemente anormal, que lesiona alguna garantía constitucional, puesto que con él se procura mantener el statu quo vigente, impidiendo que las partes se hagan justicia por sí mismas, a través de conductas de facto que alteren el orden jurídico establecido.

En una ampliación del informe, la recurrida detalla que ha realizado las siguientes refacturaciones a favor del cliente: 1) \$64.022.804, que se desglosan en \$55.148.608 por consumos y demandas, y \$8.874.196, por concepto de intereses, los días 1 y 11 de diciembre del 2023 respectivamente; y 2) \$11.581.806 adicionales,



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: ECZXUGEMXF

por concepto de intereses, con fecha 7 de agosto del 2024, según lo señalado en el informe evacuado inicialmente.

De esta manera, expone que ha refacturado al cliente la suma total de \$75.604.610, dando así cumplimiento a lo ordenado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles en sede administrativa. No obstante, reitera que, independientemente de las refacturaciones efectuadas a la deuda del cliente, éste no registra pagos en su cuenta de suministro eléctrico desde el 1 de junio de 2022, acumulando deuda impaga desde hace más de dos años y siete meses, obligación que considera vigente independientemente de la existencia o no de problemas en la facturación del cliente.

Adicionalmente, en el segundo otrosí del informe, solicita que, considerando que con fecha 1 de diciembre de 2024 la Superintendencia de Electricidad y Combustibles evacuó informe en la presente causa informando que los reclamos administrativos realizados por el cliente "fueron indebidamente catalogadas como reclamos sin previa interacción con la distribuidora, derivándose para su tratamiento directamente por la concesionaria", y tratándose el reclamo de un asunto altamente técnico, que involucra el cálculo especializado de la aplicación de precios, tarifas, determinación de demandas en horas punta y horario normal, consumo reactivo, cargos fijos adicionales al consumo eléctrico, entre otros aspectos, esta Corte remita los antecedentes a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles a fin de que sea este organismo técnico quien recabe todos los antecedentes que estime pertinentes para determinar la real situación del cliente, determinando si las medidas y rebajas realizadas por la recurrida fueron o no suficientes para dar cumplimiento a la normativa eléctrica, así como para que determine si la deuda actual del cliente es la que corresponde cobrar, considerando para ello los más de dos años y medio de mora en los cuales éste se encuentra.

CUARTO: Que en lo que atañe al quid del asunto que es materia de este arbitrio aparece pertinente recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: ECZXUGEMXF

una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio;

Consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

QUINTO: Que en la línea de lo que se viene reflexionando aparece oportuno resaltar que atendida la naturaleza cautelar de la presente acción constitucional, su finalidad apunta a amparar el pacífico y aparente legítimo ejercicio de un derecho determinado, el status-quo vigente, la normalidad imperante al momento de cometerse la acción u omisión agravante.

En efecto, este medio jurídico no persigue efectuar declaraciones sustantivas en cuanto a la titularidad de un determinado derecho o calidad jurídica, sino que evitar que por medios ilegales o arbitrarios se amenace, afecte o ponga término a la situación de hecho vigente respecto de ese derecho o calidad jurídica. En otras palabras, se persigue precaver que las personas se hagan justicia por su propia mano;

SEXTO: Que tal como se colige del claro tenor del libelo en que se plasma el presente arbitrio los actos que se impugnan como ilegales o arbitrarios se hacen consistir en cobros excesivos por concepto de servicios eléctricos, conforme a los montos que efectivamente correspondían al suministro otorgado al inmueble que el recurrente individualiza, a contar de mayo de 2021;

SÉPTIMO: Que del análisis de los documentos aportados por las partes, las alegaciones de la recurrente, lo informado por la recurrida y, especialmente, por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, es posible sostener que los derechos que el recurrente



solicita le sean tutelados, no pueden satisfacerse por esta vía, ni del modo en que se pide, dado que resulta evidente que el derecho reclamado es dubitado, por cuanto no existe una declaración judicial, ni administrativa que establezca de modo cierto la errada facturación del servicio eléctrico en que el actor sustenta su pretensión, situación que en cualquier caso debe ser esclarecida y reconocida en un procedimiento legal de lato conocimiento, que no puede ser sustituido por la acción constitucional de protección, puesto que ello conllevaría aceptar su indebida instrumentalización;

OCTAVO: Que a mayor abundamiento, carece esta Corte de los conocimientos técnicos que le permitirían dirimir la veracidad del reclamo del recurrente, siendo la Superintendencia de Electricidad y Combustibles el órgano especializado que tiene por finalidad, entre otras, según indica el artículo 3 numeral 16° de la Ley 18.410, comprobar, en caso, de reclamo, la exactitud de los instrumentos destinados a la medición de electricidad, de gas y de combustibles líquidos suministrados a los consumidores;

NOVENO: Que en este escenario fáctico, estos sentenciadores no pueden responsablemente tener por establecida la existencia de un acto arbitrario o ilegal que pueda ser atribuido a la recurrida y, consecuentemente, remediado por esta vía, por lo que necesariamente se desestimara el presente arbitrio.

Por estas consideraciones y en virtud de lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, **se rechaza**, sin costas, la acción cautelar deducida por don Pedro Romo Rojas en representación de la Fundación Educacional Atlántico, en contra de Enel Distribución Chile S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-23873-2024.

Pronunciada por la Novena Sala, integrada por los Ministros señor Hernán Alejandro Crisosto Greisse, señora Maritza Elena Villadangos



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: ECZXUGEMXF

Frankovich y la Abogado Integrante señora María Fernanda Vásquez Palma.

En Santiago, veintinueve de abril de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: ECZXUGEMXF

Pronunciado por la Novena Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Hernan Alejandro Crisosto G., Maritza Elena Villadangos F. y Abogada Integrante Maria Fernanda Vasquez P. Santiago, veintinueve de abril de dos mil veinticinco.

En Santiago, a veintinueve de abril de dos mil veinticinco, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: ECZXUGEMXF